



Bogotá, D.C.
170

Doctor
FREDDY ANANÍAS URREGO GARZÓN
Subsecretario de Despacho
Comisión Segunda Permanente de Gobierno
Concejo de Bogotá, D.C.
Calle 36 No. 28A – 41
Ciudad



Asunto: Respuesta Proposición No. 183 de 2020
Radicado No. 2020-421-010341-2

Respetado Subsecretario:


Acuso recibo de la Proposición No. 183 de 2020, suscrita por la Honorable Concejala Sara Castellanos Rodríguez y demás integrantes de la Bancada del Partido Liberal Colombiano, relacionada con el tema: *"Operación del ESMAD en Bogotá"*.

Sobre el particular, dentro del marco de las competencias que corresponden a esta Secretaría, anexo le remito la respuesta pertinente, suscrita por la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, según comunicación con radicado No. 20203000050633 del 31 de enero de 2020 (Anexo).

Reciba un cordial saludo,


LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno

Anexo: 3 folios

Proyectó: Claudia Marcela Suárez Jiménez – Profesional Universitario Contratista DRP 
Revisó: Fabricio José Guzmán Martínez – Profesional Universitaria DRP
Aprobó: Jaime Andrés Flórez Murcia - Director de Relaciones Políticas



300

Bogotá, D.C

MEMORANDO

PARA: JAIME ANDRÉS FLOREZ MURCIA
Director de Relaciones Políticas

DE: JOSE DAVID RIVEROS NAMEN
Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos

ASUNTO: Respuesta a la Proposición No. 183 del 27 de enero de 2020 aprobada por el Concejo de Bogotá D.C. / 20201700047033
Tema: "Operación del ESMAD en Bogotá".

Respetado Jaime Andrés,

En atención a las competencias de la Secretaría Distrital de Gobierno conferidas en el Decreto 411 de 2016 *"Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno"* y se definen las funciones y la misionalidad de la entidad, nos permitimos atender el cuestionario propuesto en los siguientes términos.

En primer lugar, la actuación que marca el manejo del derecho fundamental a la protesta pacífica por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá busca fortalecer la confianza entre la administración Distrital y la ciudadanía, en aras de establecer un proceso de reconocimiento, garantía y respeto por la protesta social como parte de la sana convivencia de la ciudad y el ejercicio de un legítimo derecho constitucional. En ese sentido, nuestras acciones se han amparado en el pleno y efectivo cumplimiento de la promoción y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y demás normas concordantes y vinculantes, particularmente las que se refieren a continuación;

En primer lugar, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas Maina Kiai ha señalado:

"Los Estados y gobiernos locales tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos de reunión pacífica y de asociación. Deben aplicar los mecanismos que les permitan desempeñar esa labor y fortalecerlos"

En ese mismo sentido, en el Informe conjunto sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones (A/HRC/31/66), expresamente se recomendó a los Estados la adopción de medidas tendientes a garantizar el citado derecho a través de, entre otros, los siguientes mecanismos:

"Las autoridades públicas, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, han de poder demostrar sus esfuerzos para mantener un verdadero diálogo con los organizadores de las reuniones y/o las personas que participan en ellas."





Las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían velar por que haya una persona de contacto accesible en la institución antes, durante y después de una reunión. Esa persona debe haber recibido formación en materia de comunicación y gestión de los conflictos y responder a los problemas relacionados con la seguridad y la conducta de la policía, así como a las solicitudes sustantivas y las opiniones expresadas por los participantes. La función de enlace debería estar separada de otras funciones policiales.

Las tácticas empleadas por las fuerzas del orden en las reuniones deberían hacer hincapié en las estrategias destinadas a reducir la tensión basándose en la comunicación, la negociación y el diálogo. La capacitación de los agentes del orden debería incluir formación previa y en el servicio, tanto en el aula como en contextos que representen distintas situaciones.

Antes de que las fuerzas de seguridad elijan y adquieran los equipos, incluidas las armas no letales, que se utilizarán en concentraciones, los Estados deberían evaluar esos equipos de manera transparente e independiente a fin de determinar si cumplen el derecho y las normas internacionales en materia de derechos humanos. En especial, debería evaluarse su precisión, fiabilidad y capacidad de minimizar los daños físicos y psicológicos.

Las autoridades deberían dialogar activamente con los supervisores manteniendo una comunicación continua antes, durante y después de una reunión; ofreciendo acceso e información a los miembros de los medios de comunicación y otros supervisores; y examinando y respondiendo a las denuncias de los supervisores después de las reuniones”;

Adicionalmente, nuestras actuaciones se enmarcan en los pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional dentro de las cuales resalta la Sentencia C-009 de 2018 que manifiesta:

Los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión. Así mismo excluyen de su contorno material las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos. Estos derechos tienen una naturaleza disruptiva, un componente estático (reunión/pública) y otro dinámico (manifestación pública). En este sentido, el ejercicio de estos derechos es determinante para la sociedad en la preservación de la democracia participativa y el pluralismo. Adicionalmente, sus limitaciones deben ser establecidas por la ley y, para que sean admisibles, deben cumplir con el principio de legalidad y, por lo tanto, ser previsibles.

Así entonces, esta promoción y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, durante los eventos de movilizaciones que han ocurrido desde el inicio de nuestra administración, ha sido reconocido por los mayores legitimadores de este campo como The Human Right Watch y la Organización de Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los cuales resaltaron que la actuación realizada corresponde y se ajusta a los estándares internacionales.



Teniendo de presente lo anterior, damos respuesta a las inquietudes incoadas a esta dependencia:

14. ¿Cuáles son las garantías que brinda la administración a las personas que no participan en las manifestaciones, particularmente, pero no únicamente, en lo atinente a la libre locomoción y el libre ejercicio de actividades?

Es importante resaltar el Informe conjunto sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones (A/HRC/31/66),

En su numeral 32. *"Las reuniones son un uso tan legítimo del espacio público como las actividades comerciales o el tránsito de vehículos y peatones. Todo uso del espacio público requiere cierta medida de coordinación para proteger intereses distintos, pero hay muchas formas legítimas en que los ciudadanos pueden utilizar los espacios públicos. Debe tolerarse cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana a causa de las concentraciones, como la perturbación del tráfico y las molestias o incluso los perjuicios para las actividades comerciales, a fin de que no se prive al derecho de su esencia".*

En el numeral 62, citando a su vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la resolución de la demanda Kuznetsov v. Russia, núm. 10877/04, 23 de octubre de 2008, párr. 44, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, párr. 197 "(...) Análogamente, aunque deben tolerarse las simples molestias para terceros o la perturbación temporal de la circulación de vehículos o peatones, si una reunión impide el acceso a servicios básicos, por ejemplo bloqueando la entrada al servicio de urgencias de un hospital, o altera de manera grave y sostenida el tráfico o la economía, por ejemplo obstruyendo una vía principal durante varios días, la dispersión podría estar justificada. El hecho de no notificar a las autoridades una reunión no justifica su disolución".

En ese orden de ideas y, de conformidad con el Decreto 563 de 2015 "Por medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica", la actuación de la administración distrital se orienta a garantizar el derecho a la protesta pacífica de las personas, atendiendo a los mecanismos para el mantenimiento del orden público y la garantía de derechos de los ciudadanos y ciudadanas bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, eficacia y necesidad en el uso de la fuerza entre otros.

Así, la Administración Distrital busca fortalecer la confianza entre la ciudadanía, a partir del reconocimiento de la protesta pacífica como parte de la sana convivencia social y el ejercicio de un legítimo derecho constitucional, contexto en el cual la ponderación de derechos busca garantizar la seguridad, integridad y vida de todos los ciudadanos que participen o no de ellas en el marco de la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Lo anterior se materializa en los pasos indicados por la alcaldesa, que se sintetizan de la siguiente manera:

- Actuación de las autoridades distritales y de los organizadores de la movilización o quien convoque a las mismas previas al desarrollo de las movilizaciones:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5, literales (a), (d), (f) del "protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá: por el derecho a la movilización





y la protesta pacífica” previo al desarrollo de la reunión se adelantarán las siguientes acciones;

- Los organizadores de la movilización o quién convoque para la misma, procurarán informar a las autoridades distritales, en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno, la fecha y hora programada, así como los recorridos en los cuales se llevará a cabo con el fin de que estas aseguren las medidas necesarias para la protección de los derechos de las y los ciudadanos involucrados.
- En caso de que los organizadores de la movilización o quién convoque para la misma no informen a las autoridades distritales, estas velarán, tan pronto tengan conocimiento del desarrollo de la movilización, por la protección de los derechos de las y los ciudadanos para lo cual propenderán por el establecimiento de un canal de diálogo, para ello informarán a la Secretaría de Gobierno y a la Policía Nacional.
- La secretaría de Gobierno informará al ministerio público para que adelanten las acciones que corresponden a la naturaleza de su función constitucional para el respeto y garantía de la protesta pacífica.
- Así mismo cuando la Secretaría Distrital de Gobierno lo considere necesario, concertará sus actividades con las entidades que resulten pertinentes para garantizar el ejercicio de los derechos de movilización y protesta pacíficos, tanto como para salvaguardar los derechos y la integridad de quienes no participen de la movilización o protesta.
- Las autoridades distritales constituirán el Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación de los funcionarios de los entes de control, en especial a aquellos encargados de velar por la protección de los derechos humanos, y dos representantes de los organizadores de la movilización o quién convoque para la misma.
- Actuación de los organizadores de la movilización o quien convoque a las mismas, de las autoridades distritales y de la fuerza pública en el desarrollo de las movilizaciones:

De acuerdo con lo establecido en los numeral 5, literales (b), 6 y 8 del “protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá: por el derecho a la movilización y la protesta pacífica” previo al desarrollo de la reunión se adelantarán las siguientes acciones;

- Los organizadores y personas que convocan la movilización cooperarán con las autoridades distritales para la garantía y el respeto de la prestación del servicio esencial de Transmilenio, con el fin de proteger los derechos del resto de la ciudadanía.



- En el momento que exista alguna anomalía en la protesta se iniciará una acción de sanción social a quienes se salen del espíritu de la manifestación expresada en un ejercicio de diálogo para apaciguar lo que este sucediendo.
- Esto lo efectuarán quienes estén en la movilización y las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización social CVI, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá: por el derecho a la movilización y la protesta pacífica adoptado por el Artículo 1 del Decreto Distrital 563 de 2015.
- En este sentido, las agrupaciones ciudadanas que actúen como CVI mantienen su carácter de expresiones ciudadanas autónomas y voluntarias, que en ejercicio de sus derechos a la participación ponen a disposición de las autoridades distritales, su experiencia y capacidad de intervención. La articulación se desarrollará en las movilizaciones que considere pertinente esta agrupación en coordinación con la Secretaría de Gobierno teniendo en cuenta que su forma de organización, integrantes y mecanismos de capacitación y coordinación interna es autónoma.
- Las CVI asumen los siguientes compromisos establecidos en el numeral 8, literal (f):
 - i. Respetar las normas y acatar las órdenes de policía impartidas en virtud del Código de Policía de Bogotá.
 - ii. Guardar la confidencialidad cuando esté prevista en las normas jurídicas vigentes, o sea acordada con los delegados de la sociedad civil.
 - iii. Promover el ejercicio pacífico del derecho a la movilización y protesta pública.
 - iv. Colaborar con las autoridades para que no se perturben o afecte el derecho a la manifestación pacífica, ni el orden público, ni los derechos de otras personas.
- Si las acciones que no cumplan con las normas de convivencia y paz en la ciudad sobrepasan las acciones de sanción social de quienes hacen parte de la protesta y de las CVI. Intervendrán los Gestores de Convivencia y Paz funcionarios civiles de la Secretaría de Seguridad, buscando por vía del diálogo apaciguar lo que este sucediendo.
- En caso de ser agotadas estas acciones si el hecho toma una connotación violenta, intervendrá la Policía Metropolitana con los miembros de Fuerza Disponible, policías que patrullan día a día las calles de Bogotá, dotados para estos eventos de casco y escudo como protección cuando el PMU considere que su actuación es necesaria para continuar con el ejercicio del derecho a la movilización pacífica.



En todo caso dichos elementos deberán permitir la identificación del personal sin dificultades.

- La actuación de la Policía Metropolitana debe estar orientada a la garantía del derecho a la movilización y la protesta pacífica de los ciudadanos que no participen de dichos hechos violentos para lo cual, se procurará neutralizar el foco de violencia evitando la dispersión de las demás personas.
- Solamente cuando se presente algo extraordinario en caso de que se hayan agotado los anteriores puntos, y como recurso de última instancia intervendrá el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, acatando los principios y estándares internacionales, así como a disposiciones contenidas en los manuales internos de la Policía Nacional atendiendo a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad, así como a la garantía de los derechos de los y las manifestantes, y de los de otros habitantes que se puedan ver afectados por su actuación.
- En caso de disturbios, las medidas adoptadas para controlar la situación, en todo caso deben proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, tanto de quienes participan de la protesta como de aquellos que no lo hacen e incluso de quienes se ven implicados en hechos violentos.
- Actuación de los organizadores de la movilización o quien convoque a las mismas, de las autoridades distritales y de la fuerza pública posterior a las movilizaciones:

Posterior al desarrollo de la movilización y en caso de ser considerado necesario por las autoridades distritales o por la sociedad civil, se podrá convocar escenarios de evaluación y seguimiento con el fin de evaluar las condiciones en las cuales se desarrolló el evento. La convocatoria a dichos escenarios estará a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Atentamente,



JOSE DAVID RIVEROS NAMEN

Subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos

Proyectó: Equipo Dirección de Convivencia y Diálogo Social

Revisó: Néstor Daniel García – Dirección de Convivencia y Diálogo Social

José Luis García Rojas – Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos

Revisó y aprobó: José David Riveros Namen - Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos